

La experiencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú*

Salomón Lerner Febres

Rector Emérito de la Pontificia
Universidad Católica del Perú

Estimados amigos:

Deseo en primer lugar expresarles mi más vivo agradecimiento por la invitación a participar en este encuentro académico y a compartir con ustedes la experiencia de memoria histórica de la violencia que se tuvo en el Perú, hace ya siete años, mediante el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Me resulta especialmente significativo tener la ocasión de comentar la experiencia peruana ante este distinguido auditorio brasileño, pues sé que también en este país se viene manifestando un impulso de memoria vinculado con la necesidad de hacer justicia sobre pasadas violaciones de derechos humanos. En ese impulso, Perú y Brasil nos incorporamos en una tendencia ética y política de alcance internacional, una corriente de pensamiento y de acción para la cual es inaceptable clausurar un pasado violento sin procurar alguna forma de reconocimiento y de dignificación a quienes fueron víctimas de crímenes o delitos muchas veces atroces.

El examen del pasado ha llegado, en efecto, a constituirse en una práctica reclamada internacionalmente a aquellas sociedades que deseen constituirse en democracias después de haber atravesado un pasado autoritario o violento. Y existen razones poderosas para fundamentar ese reclamo. Todo intento de cons-

* Conferencia en la Universidad Metodista (Sao Paulo), 19 de agosto de 2010, I Semana de Educação em Direitos Humanos.

truir una sociedad pacífica, justa y reconciliada está obligado, si es un intento sincero y lúcido, a dar un primer paso: enfrentar su historia inmediata para rescatar una verdad oculta, por un lado, por el fragor de los hechos, y por otro lado, como es bien sabido, por el interés de los más poderosos o de los victimarios. En las últimas décadas ese primer paso ha sido encargado en diversas partes del mundo a un tipo particular de organizaciones llamadas comisiones de la verdad: cuerpos de carácter estatal o internacional caracterizados por su independencia de los gobiernos de turno o de los intereses e inquietudes de las partes involucradas en el conflicto y en los hechos de violencia. Esas comisiones – usualmente desprovistas de facultades jurisdiccionales – han cumplido la función – ya sea en Argentina, Chile, Guatemala o El Salvador, para mencionar casos de nuestro continente – de oponer a sus sociedades un espejo que nunca es agradable mirar: el espejo donde se reflejan atrocidades, violaciones de los derechos humanos y en ocasiones crímenes de lesa humanidad, y donde quedan descritas las responsabilidades personales e institucionales por esos crímenes, además de las graves fallas históricas en las que tales atrocidades pudieron tener lugar. Las comisiones de la verdad, por otro lado, no solamente rescatan el pasado y corrigen el registro histórico: al hacerlo, recuperan una verdad antes negada o deformada, y de ese modo, proveen a sus Estados, gobiernos y sociedades de un instrumento insustituible para el ejercicio de la justicia. Memoria, verdad y justicia se convierten, así, en los tres eslabones que engarzan las comisiones de la verdad para iniciar el camino hacia la reconciliación.

En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tuve el alto honor de presidir, fue creada en junio de 2001 por el gobierno de transición que sucedió al gobierno autoritario de Alberto Fujimori. La misión que se encargó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación involucró tareas muy amplias y complejas, todas ellas vinculadas con la imperiosa necesidad de echar luz sobre los hechos de violencia ocurridos en nuestra sociedad entre los años 1980 y 2000. Esas tareas consistían en investigar los atropellos y violaciones de los derechos humanos producidos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 en el contexto

de la violencia de origen político iniciada por el PCP – Sendero Luminoso y replicada por las fuerzas de seguridad del Estado; establecer la identidad de las víctimas y señalar a los responsables cuando hubiera indicios suficientes para hacerlo; ofrecer al país una interpretación de las causas o factores que hicieron posible la violencia; proponer al Estado medidas de reparación de daños, y diseñar propuestas de reforma social, legal e institucional que impidieran un nuevo ciclo de violencia.

Las actividades que la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó con el fin de cumplir su mandato fueron múltiples y complejas. Y no podría ser de otro modo pues así – compleja y múltiple – era la realidad que se le encomendó esclarecer.

No era factible, en efecto, aprehender con una sola actividad ni afrontar con una sola perspectiva la historia de veinte años de violencia en un país que, de suyo, ya es variado, heterogéneo, es decir, complejo, como el Perú. En ese lapso de dos décadas se desataron no una sino muchas formas de la violencia en la sociedad peruana. Es tentador reducir los términos del problema al encuentro violento entre dos organizaciones subversivas y las fuerzas del orden del Estado peruano. Pero tan pronto como observamos con atención y sin evasiones lo ocurrido, resulta forzoso reconocer que tal formulación hubiera pecado de unilateral y reductora. En el proceso de la violencia en el Perú se produjeron cerca de setenta mil muertes y desapariciones forzadas de ciudadanos de toda condición, pero principalmente de ciudadanos pobres y que ya desde mucho antes eran víctimas de un desprecio secular en nuestro país por su condición étnica o por su precaria situación económica. En ese proceso, las instituciones del Estado democrático que debieron acudir con presteza a la defensa de la ciudadanía amenazada, no atinaron a cumplir su papel de manera eficaz y responsable. En aquellos veinte años, se acentuaron varios de los males que ya desde tiempo atrás aquejaban a la sociedad peruana: el autoritarismo, la inequidad, la pobreza y, como sustrato de todo ello, cierta propensión al maltrato mutuo que hoy sigue siendo el gran defecto por erradicar de mi país. Y, por lo demás, ese proceso de degradación y autodestrucción – en el que ciertamente existen

responsables muy concretos – no puede entenderse cabalmente sin tener en cuenta la historia peruana, en la cual era forzoso buscar, si no las causas que determinaron la violencia, por lo menos, sí, los factores que la hicieron posible.

Por lo dicho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entendió que era necesario llevar adelante un examen comprensivo de ese proceso, una investigación en la que se sopesaran los variados componentes de la historia que debíamos recuperar, en la que se compulsaran factores generales y responsabilidades individuales, en la que se esclarecieran los hechos y se rescatara el nombre y la memoria de las víctimas. En ese empeño, no solamente había que recobrar la verdad sobre el pasado, sino también trabajar sobre el presente y sobre el futuro de la sociedad peruana para promover el reconocimiento de las personas que vieron atropellados sus derechos y, por ese camino, suscitar en todo el país una reflexión sincera sobre lo ocurrido de modo que pudiera hacerse posible una genuina reconciliación.

He recordado que la restitución de la verdad es la piedra de toque de todo esfuerzo de pacificación justa. Me es necesario, ahora, reconocer que no solamente el contenido sino el carácter de esa «verdad» puede ser un asunto contencioso o al menos merecedor de una deliberación previa. ¿Qué tipo de verdad es la que cabía reconstruir sobre una tragedia humana como la vivida por el Perú? ¿Qué exigencias planteaba el hecho de que esa verdad no estuviera abocada a engrosar neutralmente el saber científico sino a servir de pilar para una tarea político-moral como es la reconciliación?

Desde el inicio, los integrantes de la CVR estuvimos conscientes de que la restitución de esa verdad nos demandaría, ciertamente, llevar adelante rigurosas investigaciones para obtener los datos relativos a las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas en esos años. Al mismo tiempo, exigiría someter tales datos a un análisis serio que permitiera una interpretación razonable de los hechos. Finalmente, entendimos que todo ese esfuerzo solamente estaría completo si se convertía en motivo de una profunda reflexión que nos permitiera, en primer lugar, comprender por qué ocurrieron los sucesos, y en segundo lugar,

qué cosas deberían ser transformadas en la vida social peruana para que tales hechos no tengan posibilidad de repetirse.

Investigación, análisis y reflexión resultaban, pues, las grandes sendas por las que debía transcurrir nuestro trabajo. Y sin embargo, debo decir que al enunciarlas hago una descripción incompleta de la verdadera naturaleza de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pues tales actividades solamente cobraban sentido si se hallaban remitidas a un propósito moral, que era la esencia de nuestra misión. Entendimos que el propósito ético de esta labor era propiciar un examen de conciencia colectivo, un reconocimiento de nuestras culpas y a partir de ello un esfuerzo sincero de reconciliación con nosotros mismos.

Así, la verdad que debíamos buscar no debía entenderse únicamente como la formulación de un enunciado que correspondiera a la realidad de los hechos, como ocurre en el dominio de la ciencia; aspirábamos a obtener y ofrecer una verdad provista de contenido y repercusión morales, es decir, una verdad que implicara reconocimiento de uno mismo y del prójimo, una verdad que poseyera atributos de curación espiritual. Lo que buscábamos era una verdad sanadora y regeneradora.

* * *

Para cumplir nuestra misión tal como la habíamos interpretado, la Comisión organizó sus actividades en unas cuantas áreas de trabajo que deseo describir sucintamente.

El área de Proceso Nacional de la Violencia investigó el comportamiento de los actores de la violencia en conexión con las características de la sociedad peruana y con los procesos políticos vividos en el país en las décadas anteriores. En esta área se realizó una detallada organización por periodos del proceso de la violencia. Esa periodización no se acogió a la división según gobiernos, sino que se basó en hitos o puntos críticos que reflejaban el desenvolvimiento propio del proceso. Por otra parte, se identificó los distintos procesos y actores relevantes para entender la violencia y se encargó a diversos profesionales estudios monográficos al respecto.

Así, se investigó el comportamiento y las responsabilidades históricas o institucionales de los poderes del Estado,

de los partidos políticos que gobernaron en esos años y, desde luego, de los actores armados como fueron el PCP - Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, la policía, las fuerzas armadas y los cuerpos civiles de autodefensa. Se esclareció, asimismo, el desempeño de ciertas instituciones organizaciones e instituciones fundamentales como las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las universidades y el sistema escolar, las iglesias y otros.

El área de Esclarecimiento de Hechos se ocupó del punto central de nuestro mandato – esclarecer los hechos de violaciones de los derechos humanos producidos en el periodo 1980-2000 – y por ello agrupó un apreciable número de líneas de actividad.

Es así que se estableció una unidad de sistema de información, encargada de procesar en una base de datos la información recogida de los testimonios de las víctimas y que llegaron a 17 mil. Para recabar esos testimonios se elaboró una metodología precisa que nos permitió obtener información ordenada y útil a partir del eficiente manejo de fichas y protocolos de entrevistas por parte del personal de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de las distintas sedes regionales. El diseño del fino flujo de información nos permitió al mismo tiempo el procesamiento continuo de los datos que fuimos acopiando así como la máxima seguridad y confidencialidad de ese material.

Las peculiares características de la violencia en el Perú nos obligaron a prestar atención a procesos colectivos, y por ello nuestro plan de investigaciones recogió líneas de acción variadas como fueron los Estudios en Profundidad y las Historias Regionales. Nuestros profesionales elaboraron estudios de caso muy detallados que nos permitieron no solamente conocer los hechos, sino penetrar en el significado y el impacto que estos tuvieron en la vida nacional.

Por último, en la medida que era también parte de nuestra misión el colaborar con la justicia, abrimos otras líneas de investigación destinadas a producir información útil para que el sistema judicial peruano pudiera conducir por cauces legales los casos que fuimos descubriendo. Tuvimos, así, una unidad encargada de aportar una perspectiva jurídica de derechos humanos;

ella realizó una tipificación de los crímenes que eran nuestra materia de estudio y precisó las consecuencias jurídicas de los mismos. Asimismo, se conformó una unidad de investigaciones especiales que hizo el seguimiento de algunos casos seleccionados por la comisión según variados criterios, entre los cuales fueron importantes la representatividad y la posibilidad de llegar a grados válidos de convicción o certeza sobre responsabilidades en el terreno judicial.

El área de Secuelas, Reparaciones y Reconciliación agrupó tres focos de investigación y reflexión muy relacionados en la medida en que se asociaban con la identificación de los perjuicios y daños sufridos para proponer acciones restauradoras futuras.

La sección de Secuelas de la Violencia tuvo la misión de identificar de manera sistemática los daños sufridos por la población. Estas secuelas fueron examinadas en tres dimensiones: daños de la salud mental, pérdidas económicas y descomposición sociopolítica. El área de secuelas analizó el impacto de la violencia según esas dimensiones y según diversos ámbitos de afectación: individual, familiar, local, regional o nacional.

El área de reparaciones se encargó de elaborar un plan general que sería presentado a las autoridades del Estado. Esas reparaciones fueron elaboradas teniendo en cuenta una definición de víctima que, aunque centrada en el ámbito individual, no excluía la consideración de víctimas colectivas. Las reparaciones, según fue convicción de la Comisión, no deberían ser exclusiva o principalmente pecuniarias e individualizadas, aunque éstas no deberían ser excluidas, pues son un derecho de las víctimas. Propusimos asimismo reparaciones simbólicas y colectivas, en términos de ayuda al desarrollo de las localidades afectadas y de superación de algunos de los peores daños sufridos, como son los traumas de guerra que afectan a muchos jóvenes humildes en todo el país.

Por último, otra unidad en esta área tuvo la misión de elaborar una propuesta de reconciliación. La reconciliación como se comprenderá no era un producto que se pudiera presentar al país en una fecha definida. Entendimos que nuestra misión era dejar iniciado un proceso que tendrá que ser llevado a cabo

por la sociedad peruana a lo largo de los años siguientes. Es así que se realizaron estudios para la preparación de un marco teórico sobre cómo deberíamos entender esa reconciliación, y organizamos talleres con la población afectada en distintos puntos del país para recoger sus experiencias y expectativas al respecto. El resultado fue una propuesta de acciones o procesos de reconciliación que resultaron del cotejo del marco teórico antes mencionado con lo recogido en el trabajo de campo.

El área de Comunicación y Educación tuvo la delicada tarea de hacer que la sociedad peruana se involucrara en el proceso que estaba llevando a cabo la Comisión. No se limitó a informar de nuestras actividades en el sentido tradicional del término, sino que cumplió una tarea de sensibilización de la ciudadanía. Para lograr ese fin, desarrolló diversas campañas que buscaban dar a conocer la existencia y objetivos de la Comisión tratando de involucrar a la población en nuestro empeño, además de propiciar que las víctimas acudan a la Comisión a dar su testimonio.

Se trabajó, en contacto con diversas organizaciones amigas que nos ayudaron a difundir nuestro mensaje. Parte importante de esta actividad fue la creación de una red de voluntarios – principalmente jóvenes estudiantes de las Universidades del país – que colaboraron con la Comisión en diversas tareas, entre ellas las de difusión de nuestro mensaje.

Por último, la Comisión contó con una unidad de Audiencias Públicas, responsable de la organización de espacios en los que las víctimas dieron su testimonio que fue transmitido a todo el país por radio y televisión. Realizamos once audiencias públicas en diversas localidades del país, principalmente en las más afectadas por la violencia, y ellas ayudaron poderosamente a que se conociera el trabajo y los objetivos de la Comisión.

Conviene señalar que ésta fue la primera vez que una Comisión de la Verdad u otro organismo análogo celebró audiencias públicas sobre derechos humanos en América Latina. Según el decreto que creó a la Comisión Peruana, ésta se hallaba legalmente autorizada, pero no obligada, a realizar estas sesiones. Fue, pues, una potestad de los comisionados organizarlas y llevarlas a cabo. Nosotros asumimos esa facultad legal como una verdadera

obligación moral, y así se reflejó en nuestro plan de trabajo, por una razón muy clara: estábamos convencidos de que nuestro deber principal era dar atención a las víctimas y entendimos que éstas no sólo habían sufrido atropellos físicos, sino también el despojo de su dignidad en el silencio y la nocturnidad y que ello debía ser reconocido otorgándoles voz y escucha.

De otro lado es importante explicar que para cumplir nuestro mandato – y para honrar el principio asumido de dar prioridad a las víctimas – la Comisión asumió desde el principio la obligación de estar presente en todo el país. A ese deber respondió nuestra organización territorial, que si bien demandó importantes recursos, fue la única manera de ser fieles al mandato recibido y a la expectativa de una población marginada y olvidada durante años. La Comisión se organizó territorialmente en sedes regionales. Además de la sede central, situada en Lima, funcionaron cinco sedes distribuidas de manera estratégica en diversos puntos del territorio nacional.

Todas ellas contaron con equipos fijos para recibir denuncias; equipos de verificación para comprobarlas en el campo; y equipos móviles itinerantes que se hallaban destinados a recabar información y también a orientar legalmente y brindar apoyo psicológico a las víctimas de los pueblos más alejados del país.

* * * * *

Ahora bien, realizada la descripción del trabajo realizado, me toca presentarles los resultados de nuestro esfuerzo, los que se hallan contenidos en el Informe Final que fue entregado a las más altas autoridades del país el día 28 de agosto del año 2003.

El Informe, que comprende nueve volúmenes y cerca de 4000 páginas, conduce a una serie de conclusiones y recomendaciones que, en forma sintética, fueron leídas al pueblo de Ayacucho, el departamento más golpeado por la violencia, en un mensaje que se dirigía a toda la Nación un día después de la entrega oficial del trabajo. Permítanme ofrecerles ahora lo sustancial de lo expresado en aquella ocasión.

1. Son cerca de 70 mil los peruanos y peruanas muertos o desaparecidos en esos años. Buena parte de ellos han estado

ausentes de la memoria nacional, han sido peruanos olvidados, hechos a un lado por el Estado y la sociedad oficial.

2. La Comisión encontró en esa violencia un segundo motivo de escándalo y de indignación: la manera en que la desigualdad acompaña la existencia de los peruanos no solamente en la vida, sino también en la muerte. El 75 por ciento de las víctimas fatales tenían como idioma materno el quechua, la principal lengua autóctona del Perú. La gran mayoría de ellos eran campesinos, habitantes de las comunidades del departamento de Ayacucho, así como de Apurímac y Huancavelica.

3. La Comisión ha encontrado, asimismo, que la violencia de las organizaciones subversivas, así como la de las fuerzas del Estado, se ejerció durante largos años sin hacer diferencias entre inocentes o culpables, ni siquiera entre evidentes inocentes y sólo posibles culpables. Niños y ancianos, mujeres embarazadas o adolescentes, población desarmada, todos fueron blanco de la misma barbarie que, si bien de origen distinto – la agresión de Sendero Luminoso en un caso; la respuesta del Estado, en el otro – se unieron muchas veces precisamente en esa cualidad: la de ser actos bárbaros ejecutados contra seres humanos indefensos; la de ser crímenes de lesa humanidad que la Comisión condenó en los términos más enérgicos. Esta violencia tiene responsables muy concretos, y así fue señalado en el informe final de la Comisión.

4. El primer y principal culpable, desde todo punto de vista, fue la organización terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Lo fue porque ella desencadenó la violencia precisamente cuando se restablecía el sistema democrático en el país después de doce años de dictadura militar.

La Comisión encontró en los militantes del autodenominado Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, y de manera principal en sus jefes ideológicos y políticos, su Comité Central y sus principales órganos de conducción, responsabilidad por graves y numerosos crímenes de lesa humanidad practicados con crueldad extrema: el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, las prácticas de torturas para castigar y aterrorizar a la población, los aniquilamientos selectivos y las masacres de

comunidades campesinas, el abuso sexual contra las mujeres, esa suerte de deleite que parecían sentir en ocasionar sufrimiento a sus víctimas. La Comisión sostiene que la dirección política y militar del PCP – SL es responsable de violaciones de los derechos humanos practicadas de manera sistemática y generalizada como parte de su estrategia de poder.

¿Cómo explicar la degradación de una agrupación de seres humanos hasta ese nivel de crueldad? Será imposible, de seguro, ofrecer una respuesta completa. Pero la Comisión considera que los crímenes de lesa humanidad cometidos no hubieran sido posibles sin la voluntad obstinada de un grupo de personas aferradas a una ideología totalitaria que despreciaba el valor de la vida humana y que se expresaba en un culto delirante a su líder, Abimael Guzmán Reinoso, promovido por él mismo.

La Comisión señaló en su informe final que considera a la cúpula dirigente del PCP – Sendero Luminoso responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de esa organización, y declaró que por la magnitud de sus crímenes, y por su naturaleza inherentemente criminal, el PCP – Sendero Luminoso no puede tener un lugar en la sociedad democrática que se quiere construir.

5. En escala menor, pero no por ello menos grave, el llamado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) también incurrió en crímenes de lesa humanidad tales como asesinatos selectivos y secuestros, y sobre todo contribuyó a mantener un clima de zozobra que, a su vez, agravó la situación de violencia en el país.

6. La Comisión consideró que el Estado peruano tenía no solamente el derecho sino también la obligación de responder, en defensa del Estado de Derecho, a los actos criminales y con frecuencia terroristas del autodenominado Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Los Poderes del Estado, los partidos políticos que ocupaban el gobierno central y los gobiernos locales, los cuerpos de la policía, las fuerzas armadas del Perú, todos ellos tuvieron el deber de actuar contra la violencia armada de las organizaciones subversivas, y en esa acción muchos perdieron la vida o sufrieron graves lesiones.

7. Y sin embargo de lo dicho, resultó claro que no todos cumplieron sus deberes cabalmente o con rectitud. La Comisión encontró grandes y graves responsabilidades en los gobiernos civiles electos que gobernaron durante el periodo de la violencia. Aunque variadas y complejas, esas responsabilidades pueden resumirse en la deplorable abdicación que esos gobiernos hicieron de la autoridad y las facultades constitucionales que el pueblo les había dado, autoridad que no vacilaron en ceder a las fuerzas armadas para que ellas enfrentasen la subversión sin el obligado control del poder civil. Mediante la declaración de estados de emergencia no reglamentados debidamente; mediante la constitución de comandos político-militares investidos de poderes cada vez más amplios sobre la población; mediante la tolerancia, la indiferencia y el encubrimiento de violaciones de derechos humanos ampliamente denunciadas, esos gobiernos incurrieron en una gravísima responsabilidad política por los atropellos sufridos por la población ayacuchana, por la población andina y por la población peruana en general.

8. La Comisión encontró, asimismo, responsabilidades muy grandes en los mandos de las fuerzas armadas que, en representación de sus instituciones, y siguiendo doctrinas y estrategias propias de éstas, cometieron, propiciaron o avalaron atropellos a los derechos fundamentales de la población.

En relación con el punto anterior, hemos afirmado que es insostenible insistir, como aun se repite en el Perú, en que solamente se cometieron excesos. Un exceso es una extralimitación en el cumplimiento de las funciones. Y, a la luz de la evidencia encontrada, la Comisión no admite que se puedan considerar como tales las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometieron principalmente en las zonas bajo dominio de los comandos político-militares.

Esos crímenes fueron variados y en ciertos lugares y periodos tuvieron carácter generalizado o sistemático, características que los convierten en crímenes de lesa humanidad. La Comisión ha constatado que las violaciones de derechos humanos más graves cometidas por agentes de las fuerzas armadas fueron la ejecución arbitraria, la desaparición forzada de personas, las

torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre estos, recibió nuestra condena particular la violencia sexual contra la mujer en la modalidad de violación sexual, acto abominable que deshonra a quienes fueron sus culpables directos y a quienes, eventualmente, en su calidad de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron. La Comisión consideró que es una necesidad de la Nación que actúe la justicia en todos estos casos, pues la impunidad es incompatible con la democracia y la legalidad que buscamos reconstruir en nuestro país.

9. La Comisión mencionó también una secuela terrible de la violencia que se expresa en los desplazamientos masivos por los que cientos de miles de personas tuvieron que abandonar sus tierras para evitar el exterminio.

10. Se encontró, también, que muchas organizaciones sociales cumplieron un papel invaluable en la defensa de las personas afectadas por la violencia. Así, se rindió especial tributo al movimiento de derechos humanos, a las organizaciones de familiares y las organizaciones de mujeres. Son organizaciones que desde muy temprano señalaron atropellos cometidos y culpables y que lucharon en defensa de quienes eran víctimas de los actores armados.

Pero, así como diversas organizaciones o instituciones destacaron por su compromiso moral con la justicia y un humanitarismo básico, hubo otras que, en ciertos momentos, o durante todo el periodo de violencia, incumplieron sus responsabilidades. El sistema de administración de justicia, por ejemplo, fue en términos generales renuente o incapaz de aplicar la ley para defender los derechos humanos.

11. La Comisión señaló la absoluta importancia del funcionamiento de la justicia frente a las responsabilidades halladas. Esa es una tarea que, como muchas otras derivadas del trabajo de la Comisión, las autoridades no han afrontado debidamente. Pero, de otro lado, también es preciso señalar que las responsabilidades no son únicamente de naturaleza judicial. También existen las responsabilidades morales y las responsabilidades políticas en que han incurrido personas, agrupaciones u organizaciones. No era la Comisión la que debía imponer sanciones en este terreno,

del mismo modo en que ella tampoco podía juzgar ni condenar en el terreno judicial. Por ello, al cabo de nuestra labor llamamos a la sociedad peruana a evaluar, ponderar, apreciar nuestra reconstrucción histórica de los hechos, juzgar las responsabilidades que se había encontrado e imponer las sanciones históricas y morales que todo pueblo está facultado para impartir en un orden democrático. A siete años del trabajo de la Comisión, ese examen histórico de nuestras instituciones y autoridades es todavía una tarea de cumplimiento pendiente.

Recomendaciones

Conocer la verdad sobre el pasado es, como se sabe, requisito indispensable y, sin embargo, insuficiente para la superación de una historia de violencia, enfrentamientos y abusos. Es necesario actuar sobre ese pasado, un actuar que, para ser transformador, debe encontrar apoyo en la verdad que ha sido rescatada, reconstruida y, sobre todo, reconocida como tal por una nación.

La CVR tuvo el encargo de hacer recomendaciones al Estado sobre los siguientes temas: reparaciones a las víctimas de la violencia, reformas institucionales a manera de garantías de no repetición; mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. Al cabo de su investigación, la CVR hizo algunas recomendaciones.

(a) Plan integral de reparaciones

La CVR propuso un plan integral de reparaciones compuesto por seis programas: reparaciones simbólicas; reparaciones en salud; reparaciones en términos de acceso a la educación; restitución de derechos ciudadanos; reparaciones económicas, y reparaciones colectivas.

Estos seis programas son complementarios pues ellos responden de la manera más completa a los diversos tipos de daños derivados del proceso de violencia. La CVR sostiene que, adicionalmente a su función estrictamente reparadora, ese plan integral ha de servir para fortalecer el reconocimiento de su calidad de ciudadanos plenos a las víctimas, que son, en su

inmensa mayoría, personas de los sectores más marginados y excluidos en la historia del Perú.

Conviene señalar que este plan de reparaciones no ha sido cumplido por el Estado peruano aunque sí se ha dictado una ley que lo hace oficial y una institución encargada de registrar a las víctimas para ese fin. Existe, sin embargo, mucha lentitud y poca voluntad política real para cumplir con esta obligación, de manera tal que se puede afirmar que siete años de presentadas estas recomendaciones, todavía no se ha cumplido el derecho de las víctimas a reparaciones en el Perú.

(b) Reformas institucionales

La CVR encontró en el curso de su trabajo que la intensidad, duración, expansión y crueldad del proceso de violencia tuvo como factores causantes, además de individuos y grupos cuyas responsabilidades quedan señaladas, a ciertos rasgos históricos de la sociedad y el Estado peruanos. El elemento común de esos rasgos es el configurar un patrón de exclusión y marginación – de base socioeconómica, pero también étnica y racial – que pende como una amenaza permanente sobre la paz, la democracia y el desarrollo del Perú. En virtud de ello, la CVR propuso un conjunto de reformas institucionales en cuatro grandes áreas.

1. Recomendaciones para lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana.

2. Recomendaciones para afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del poder político, para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno.

3. Recomendaciones para la reforma del sistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.

4. Recomendaciones para la elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos: el respeto a los derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cul-

tural; y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales.

Se trata de un conjunto básico de transformaciones dirigidas no solamente a superar el legado de la violencia, sino también, en perspectiva más amplia, a consolidar la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Desafortunadamente, las élites políticas y económicas del país no han mostrado hasta el día de hoy ningún interés en asumir esta tarea de reforma.

Reconciliación

Ahora bien, las recomendaciones que he reseñado muy brevemente se encuentran remitidas a un mismo propósito moral y político que las contiene y las trasciende. Me refiero a la meta de la reconciliación.

El concepto de reconciliación propuesto por la CVR excluye por principio toda forma de impunidad – amnistías, indultos o cualquier otro mecanismo – para los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos. La reconciliación tampoco es entendida por fuerza como un proceso de perdón o de reencuentro individual entre víctimas y perpetradores. Aquella es entendida en una dimensión más amplia como la restauración de los vínculos sociales dañados por el proceso de violencia o el mejoramiento de aquellos vínculos signados por la desigualdad y el desprecio que hicieron posible dicha violencia.

La reconciliación se entiende, desde la perspectiva de la CVR, como un reencuentro entre el Estado y la sociedad y descansa sobre tres pilares: el conocimiento, la propagación y la aceptación de la verdad; la justicia en su dimensión reparadora para las víctimas y sancionadora hacia los perpetradores; y las reformas institucionales señaladas líneas arriba.

Esta particular forma de entender el concepto y el proceso de reconciliación, como lo sugerí al inicio de esta presentación, tiene asidero en la historia concreta de la mayoría de países de América Latina. En ellos, la violencia, el autoritarismo y las masivas violaciones de derechos humanos se presentan en un contexto histórico muy fuertemente marcado por la exclusión y la marginación de la población nativa, usualmente denominada

indígena, frente a la cual tanto las organizaciones cuanto las fuerzas de seguridad estatales se sienten con licencia para cometer atropellos atroces, ya sea para transformar el orden social o para conservarlo. El telón de fondo de esos abusos, y el nombre más específico de esa exclusión, es el profundo déficit de reconocimiento y de ciudadanía que afecta a las poblaciones indígenas en países que, como el Perú, han experimentado procesos de violencia. En ese escenario, la reconciliación no puede ser otra cosa que la construcción de esa ciudadanía y el impulso de un reconocimiento estatal y social a esas poblaciones excluidas.

Reconciliación y memoria

He señalado la fuerte vinculación entre reconciliación y recuperación de la verdad sobre hechos pasados. Esta es, desde luego, una forma indirecta de decir que en todo proceso de reconciliación, tal como lo estamos entendiendo, el rescate de la memoria histórica de lo sucedido se constituye en un ingrediente esencial. Reconciliarnos es, también, reencontrarnos en una idea colectivamente aceptable del pasado nacional, sobre todo en relación con hechos traumáticos y divisivos como son los conflictos armados internos.

Debo explicar ahora, para concluir esta exposición, cómo es que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú concibió ese ejercicio de la memoria.

Se trata de una memoria asumida en un sentido rico y pleno, que no ha de entenderse como simple evocación de hechos ya ocurridos ni como mera experiencia intelectual. Hablamos más bien de una comunión de experiencias teñida de afectividad, y que aspira a tender un puente entre el pasado y el presente para la reasignación de un nuevo y superior sentido a sucesos que en tanto meros hechos el tiempo ha clausurado.

Ahora bien, ¿cómo asumir esta experiencia?

El mal, el atropello, una vez cometidos, no se puede borrar. Ellos se integran a la cadena de la eternidad y permanecen ahí por siempre. ¿Qué hacer, entonces, frente a ellos?

Sólo existe un camino. Y éste no es otro que el de la reapropiación de los hechos a través de su reconocimiento y

aceptación para, a partir de tal entendimiento, brindarles una nueva inteligibilidad.

Este es, a nuestro juicio, el único medio para situar en una proporción humana y en términos de significación actos del pasado que, por ser tales, son inamovibles y que por sus características de crueldad nos conducen más allá de los límites concebibles dentro de una comunidad civilizada.

Por cierto, en todo momento y lugar habrá quien sostenga que frente a una violencia tal como la describimos la actitud más sensata es la del olvido. Tal creencia – estamos convencidos de ello – es un engaño. El olvido no es jamás un remedio, sino un proceder agravante que profundiza el mal. La razón de ello es clara: porque en la actitud de aquel que finge que nada ha ocurrido, en la postura timorata o interesada que condena la conmemoración, se halla latente en el fondo una renuncia a la facultad de dar sentido. Preconizar el olvido implica escudarse en la indiferencia frente al daño y traicionar así el principio de solidaridad que se encuentra en los cimientos de la vida civilizada. No sólo es una actitud cómoda y fácil de resignación frente al daño ocasionado sino también el desperdicio de la oportunidad de hacernos efectivamente dueños del pasado, de luchar contra la eternidad de los hechos. En última instancia, es aceptar una mirada frívola sobre el presente porque no se tiene el coraje de escarbar en sus raíces para, allí, purificarlo.

Frente a ese olvido, el ejercicio deliberado de la memoria aparece como una forma más valiente, más honesta, más eficaz de hacer frente a aquello que duele y que ya no puede ser sustraído a la cadena de lo existente. Esa memoria es, ciertamente, un atributo individual. Cada uno de nosotros sabe rescatar de su pasado los hechos que resultan importantes para su propia historia de vida. Sin embargo, en el caso de esa violencia que se ejerce a contrapelo de la comunidad política, la memoria ha de ser también colectiva. Así como el diálogo, en su necesaria pluralidad, funda la comunidad humana, ésta, en relación con su pasado, necesita también descansar sobre un legado de recuerdos compartidos.

Ahora bien, así como en el caso de la memoria individual ella puede, en una evocación insincera, deformarse remitiéndonos

a un pasado desfigurado y, ya en los límites, asumir la postura cínica del olvido intencional que es la memoria liquidándose a ella misma, del mismo modo no todo ejercicio de la memoria colectiva tiene las propiedades de sanación y humanización que antes hemos señalado. Existen, en principio, ciertas patologías del recuerdo común de las que conviene ser advertidos. Así, existe el recuerdo manipulado que en ocasiones los poderosos imponen a los más débiles. Son situaciones en que ocurre un falseamiento de la verdad histórica puesto que se traiciona la experiencia vivida por diversas comunidades, de modo que los vencedores prolonguen la violencia a través de relatos oficiales que pretenden arraigarse como verdad en el orden subjetivo de la convivencia humana. Al ocurrir esta patología de la memoria no solamente se arrebató a las víctimas su bienestar material, sino que se destruye ese último reducto de humanidad que es residencia simbólica y afectiva e interpretación de la vida y el destino; para decirlo en un solo término, se borra la identidad.

Debe quedar claro, por tanto, que la memoria colectiva de que hablamos no podía ser una memoria fabricada como instrumento político sino, por el contrario, un recordar comunitario que supiera ser fiel a los hechos y respetuoso de las experiencias de esos hechos.

Por otro lado, si la memoria para la dominación es repudiable, también lo es la memoria vindicativa. No se recuerda un episodio de violencia para convertirse en esclavos del pasado, sino para humanizar ese pasado terrible; como decíamos antes, para purificar su sentido. Por ello, esa memoria minuciosa de los agravios que se dirige a motivar la venganza es, en última instancia, un sometimiento al pasado. Es una memoria que no libera, sino que aprisiona; que no eleva el pasado sino que degrada el presente. Los antiguos griegos enseñaron que una forma de alcanzar la libertad era romper el círculo fatal de la venganza. La memoria ha de servir para ello y no para encerrarnos en un ciclo infinito de agravios y represalias.

Por último, junto a la memoria para la dominación y la memoria vindicativa aparece tal vez la actitud más perversa frente a un pasado violento. Me refiero, una vez más, a esa memoria

que se anula a sí misma, que renuncia a su propio ser, que abdica de sus poderes para preconizar una rutina construida sobre el olvido. La memoria olvidada de sí misma es una forma cínica y final de repudio de nuestra condición humana.

Llegados a este punto, cabía preguntarse, en el caso peruano: ¿qué tipo de memoria sería la que nos pudiera conducir a una reconciliación con el pasado sin que ello significara pura evocación y conformidad con la violencia? Para nosotros la respuesta fue clara. Se trataba de una memoria ética, una memoria ejercida desde nuestra radical e inalienable libertad. Así, toda rememoración había de ser un movimiento deliberado de nuestra conciencia: elegimos recordar, y una vez que hemos hecho esa elección, nuestros recuerdos comparecen ante nosotros en consonancia con las solicitudes de nuestra identidad. Nadie puede recordar por nosotros; nadie nos puede imponer trozos de nuestro pasado como un patrimonio afectivo decidido externamente.

Adicionalmente, esa memoria ética, además de ser libre, tendría que ser respetuosa también de nuestra condición de seres sociales. Es difícil que haya jirones de pasado que nos pertenezcan sólo a nosotros. Y eso es del todo imposible cuando la materia del recuerdo es una historia de violencia. Ese pasado es común, y por tanto, la memoria, para tener relevancia colectiva, ha de ser fruto de un diálogo intersubjetivo, de una suerte de pacto de nuestros afectos. Pero ese diálogo no tenía que dirigirse a seleccionar los hechos, sino a expresar de manera aceptable para todos la experiencia de esos hechos. Es en esa confluencia, y sólo en ella, donde es posible la *con-memoración* y no únicamente la *re-memoración* de lo *in-olvidable*. Ese recordar juntos la violencia abre las puertas también para un condolerse, para la experiencia de un padecimiento compartido y de un arrepentimiento sincero que signifique, por último, la promesa de la reconciliación.

Esa memoria ética será, pues, un acto de encuentro y no de aislamiento, de integración y no de exclusión, y estará animada en primer lugar por el principio del reconocimiento.

He señalado que el ejercicio del recuerdo colectivo no tiene como meta el convertirnos en prisioneros del pasado. Ahí se encuentra una interesante paradoja. La memoria nos remite al

pasado, ciertamente, pero al hacerlo tiene la facultad de dirigirnos hacia el futuro. El recuerdo comunitario es, por sobre todo, el primer escalón de todo proyecto de futuro para una sociedad que, como la peruana o como la colombiana, ha padecido un ciclo de violencia honda y terrible. Nada verdaderamente valioso y perdurable puede edificarse sobre los cimientos del olvido o del recuerdo interesado. Una sociedad que se quiere pacífica y democrática, una nación de personas reconciliadas entre sí y con su propia historia, sólo puede nacer de un ejercicio valiente de esa memoria ética que he mencionado.

* * * * *

Así, al hablar de reconciliación hacemos referencia a un proceso en el cual se anudan con firmeza – con fuerza de necesidad lógica, ética e histórica – la verdad sobre el pasado – que llamamos memoria colectiva –, el ejercicio de la justicia sancionadora y retributiva, y la voluntad de enmienda, materializada en reformas institucionales, de todo un Estado y una sociedad que ha vivido de espaldas a la mayoría de su población. Esa población excluida, como sabemos, en muchos países de América Latina, es la población indígena, rural, campesina, hablante de lenguas nativas distintas del castellano. La violencia y el abuso en el Perú y en otros países tiene su terreno más firme en esa exclusión, que es exclusión de bienes y servicios, pero, fundamentalmente, de reconocimiento. Y por ello, la paz y la reconciliación solamente pueden ocurrir bajo la forma de un amplio proceso de construcción de la ciudadanía.

Lo señalado está lejos de ser una realidad en el Perú. De hecho, como de algún modo lo he ido mencionando, es forzoso reconocer que desde que concluyó el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es muy poco, o nada, lo que el Estado ha hecho para cumplir sus recomendaciones. Ello, sin embargo, no resta legitimidad al diagnóstico y la propuesta que he reseñado: junto con la CVR hay amplios sectores de la sociedad que están convencidos de que el camino a una paz duradera es del reconocimiento de la verdad histórica, la justicia penal, las

reparaciones y las reformas institucionales. Y los sobresaltos que continuamente vive el actual experimento democrático peruano parecen darnos la razón. El trabajo de la memoria tal como se ha experimentado en Perú y en muchos otros países trasciende largamente las limitaciones e insuficiencias de la actualidad política. Es un trabajo que se realiza y que debe ser concebido en una perspectiva de largo plazo. Así, creo yo, lo concibió la Comisión de la Verdad y Reconciliación al embarcarse en la tarea que acabo de resumir. Por ello, quienes fueron parte de ella y los sectores de la sociedad peruana que se sintieron identificados, comprometidos o representados por esa labor, entienden que fue un trabajo necesario y fructífero, y así lo puede ser también para otras sociedades que se embarquen en el mismo propósito de enfrentar su pasado con honestidad y con valentía.